

CRONICA DEL MES

Eugenio C. Anaya, h.

La profunda dependencia de El Salvador respecto a los Estados Unidos se ha puesto en evidencia una vez más en este mes: el proyecto salvadoreño-norteamericano de exterminio de la guerrilla exige una constante, y tal vez creciente, ayuda militar y económica que debe ser aprobada por el poder legislativo de aquel país, tras la impuesta y exigida certificación de Reagan de que el proceso salvadoreño avanza en el plano democrático, en el respeto a los derechos humanos, en las reformas y en el diálogo con los insurgentes. A finales de julio la administración debía presentar esa certificación por lo cual aumentaron las presiones al gobierno salvadoreño para hacerla creíble.

En mayo del presente año el todavía Secretario de Estado, general Haig, envió a su embajada en El Salvador un "memorandum confidencial" con normas muy precisas que se debían implementar para preparar la certificación presidencial; se insiste en el avance democrático, en un programa de derechos humanos que implique mayor control de los cuerpos armados e incluso establezca un sistema de incentivos para que haya prisioneros de guerra vivos y evitar las fricciones entre el gobierno y la Cruz Roja Internacional que amenaza con retirarse del país, y finalmente el mantenimiento de las reformas —de modo especial la agraria— intensificando la entrega de títulos de propiedad a los beneficiarios y obteniendo declaraciones públicas del gobierno, la asamblea y la institución castrense sobre su irreversibilidad.

La presión norteamericana desencadenó una serie de acciones y reacciones en las distintas fuerzas sociales y políticas en El Salvador. Primero el presidente de ANEP, en su discurso de reelección, se quejó de no haber sido bien recibido

en los Estados Unidos por los congresistas gracias al influjo de la izquierda; asimismo reconoció que la asistencia militar es indispensable para no caer en manos del marxismo; algo similar diría D'Aubuisson a sus correligionarios de ARENA, al lamentar las condiciones a la ayuda militar que, en definitiva, defiende también los intereses estratégicos norteamericanos.

Mientras el presidente Magaña declaraba que se progresaba en la democratización a través del "gobierno de unidad nacional", los representantes de AD negaban que hubiera un tal gobierno, afirmaban que sólo había un reparto de puestos y que después de las elecciones la situación había empeorado en todos los aspectos hasta llegar a un caos total, "en vez de un gobierno de crisis tenemos un gobierno en crisis". El mismo Rey Prendes, jefe de la bancada DC, afirmó que hasta ahora sólo había habido reparto de puestos.

En cuanto a los derechos humanos, si bien la Cruz Roja Internacional comenzó una campaña en los cuarteles para insistir en el respeto a la vida de los prisioneros de guerra, y si bien durante el mes parece haber disminuido el número de muertos de la población civil, la misma DC ha acusado a miembros de la FA de estar involucrados en asesinatos de correligionarios suyos y ha denunciado la existencia de una "espiral de violencia". Pero la acusación más grave la hizo la empresa privada, en un comunicado con ocasión del asesinato del presidente de la Feria Internacional, Nicolás Nasser al responsabilizar a algunos dirigentes de la FA de no cumplir con su cometido de defender la vida de ciudadanos dedicados a las labores constructivas, ni de garantizar el orden; también señalaron que el desaliento cundía porque últimamente se vivía una violencia sin barre-

ras y una situación de anarquía e inseguridad. A finales del mes y tras la certificación de Reagan, fue capturado y desaparecido el gerente de ASI y su hija, Patricia Cuellar, ésta última de nacionalidad norteamericana.

Por lo que se refiere a la reforma agraria, contra las protestas de diferentes organizaciones de derecha y de editoriales de los periódicos que abogaban por el retorno a una economía de mercado, durante el mes se intensificaron los actos de entrega de títulos a beneficiarios, individuales o cooperativas, teniéndose dichos actos en los cuarteles del país, bajo la presidencia de Magaña, las más altas autoridades militares y los directivos de ARENA (simultáneamente aparecieron publicaciones del ISTA haciendo propaganda de los repartos encuadradas en los colores de ARENA). La FA repitió públicamente su compromiso con la reforma y reinstaló a 1.723 campesinos de los 9.200 que habían sido desalojados de sus tierras por los antiguos propietarios. La UPD manifestó que la FA era la única que apoyaba la reforma, pues otros grupos políticos en el poder no sólo estaban en contra, sino que estaban desmembrando y desarticulando todas las estructuras y cuadros, al tiempo que desataban una guerra psicológica contra el movimiento sindical democrático del ISTA.

En fin, el mismo Thomas O. Enders y Elliot Abrams visitaron El Salvador en vísperas de la certificación, para buscar argumentos en su favor, tanto en lo que se refiere a las reformas como a los derechos humanos, para lo cual el último visitó, entre otras oficinas, el cuartel general de la Policía de Hacienda.

El 28 de julio el nuevo Secretario de Estado, a nombre del presidente Reagan, certificó en el Capitolio que si bien la situación de El Salvador, en los puntos requeridos, no era el ideal y que todavía se mantenían serias deficiencias, sin embargo había progresos suficientes para mantener la ayuda, indispensable, por otro lado, para asegurar la defensa de los intereses y la seguridad nacional norteamericana. El senador Dodd calificó tal declaración como "una falsedad, que no refleja objetivamente cuál es la situación del país", por lo que gestionó, respaldado por 77 miembros de la cámara, un proyecto de ley que declare "nula e inválida" la certificación, a fin de suspender toda ayuda militar a El Salvador. Una serie de organizaciones, como *The American Watch Committee*, *American Civil Liberties Union*, el Consejo de Asuntos Hemisféricos y *WOLA*, entre otras, también se han manifestado

contra la certificación.

Frente a la certificación norteamericana, varias declaraciones salvadoreñas cuestionan seriamente el progreso en el país. Mons. Rivera, en una de sus homilias al comienzo del mes, denunció que "el país se hunde en la más negra crisis económica y social", "para solucionar el conflicto no sirven las armas", "ni prorrogar el estado de sitio, el decreto 544 y la represión" (abono propicio para el descuento, la subversión y la insurrección), "los escuadrones de la muerte siguen actuando impunemente y no sabemos lo que sucederá en las zonas de conflicto". Según el *New York Times*, la ayuda norteamericana servirá para entrenar dos batallones más y aumentar el número de helicópteros a 40; esto motivó unas declaraciones al mismo periódico, de parte de un representante de la CTS, sosteniendo que "económica y políticamente los trabajadores estamos en peor situación desde las elecciones", expresaban su temor de que la ayuda norteamericana "puede ser usada para fortalecer el armamento militar que será utilizado para masacrar al pueblo". También Rey Prendes y Morales Ehrlich, altos representantes del PDC, inculparon a los partidos de derecha por el retroceso en la reforma agraria y bancaria, el descenso en el cultivo del algodón, mientras que la violencia prolongada ha destruido los valores fundamentales. Por su parte, la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) hizo un llamado pastoral a la paz y al diálogo, "a buscar la solución por caminos racionales y no por la vía estéril de la violencia", para que "abandonando toda postura irreductible, se abran a un diálogo sincero, claro, leal, animado de buena voluntad y en espíritu de auténtico patriotismo" y Mons. Rivera, a propósito de una declaración de la Comunidad Democrática Centroamericana que condenaba el armamentismo de Nicaragua, dijo que la Iglesia condenaba todo armamentismo que superara el límite razonable, no sencillamente porque lo tuviera una nación determinada como Cuba o Nicaragua, sino también el propiciado a otros países por otras potencias.

La FA tomó cierto protagonismo político en el mes de julio, no sólo por lo que ya se indicó del reparto de tierras. A comienzos del mes se conmemoró el 115 aniversario de la Policía Nacional, y entre los actos protocolarios de la celebración se dio bastante publicidad al discurso del director de dicho cuerpo, Cnel. y Lic. Reynaldo López Nuila, quien se lamentó de que ningún organismo defensor de los derechos humanos ha-

ya denunciado los 4.353 asesinatos políticos, los 1.162 atentados dinamiteros, 663 incendios, 631 sabotajes y más de 135 secuestros realizados por la "delincuencia marxista" desde el año 1968 hasta el presente, ¿será un implícito reconocimiento público de que todos los otros miles y miles de casos, muchísimo más numerosos, no han sido cometidos por la izquierda?

Las diversas crisis y conflictos internos en el bloque de poder motivaron que el ministro de defensa, general García, pronunciara un discurso en cadena nacional de radio y TV. Primero se dedicó a desmentir una serie de rumores: golpe de Estado, división en la Fuerza Armada, pláticas con los subversivos, que el subsecretario de defensa, coronel Castillo, hubiera querido pasarse a la guerrilla o que el piloto del helicóptero derribado hubiera actuado de mala fe (en concreto afirmó que el coronel Castillo no era prisionero de guerra, sino secuestrado por el FMLN). En segundo lugar, se quejó de publicaciones (de la derecha, en ocasión del asesinato de Nicolás Nasser, como ya se indicó) en las que se acusaba al Alto Mando y se felicitaba a los oficiales en el frente de batalla; para rebatirlas afirmó que la FA sabía lo que estaba haciendo y, ahora más que nunca estaba cumpliendo su deber, en aras del cual habían brindado su vida 1.050 militares, desde el rango más alto hasta los de filas; ésta era una guerra irregular y muy difícil. En fin, desmintió la intervención del ejército hondureño en el país, aunque no excluyó esa posibilidad para un futuro tras una alianza entre ambos ejércitos y gobiernos. La intervención del ministro careció de la fogosidad y soltura de otras; la impresión que dejó fue que las cosas no marchaban muy bien. Tal vez el que estuviera acompañado únicamente por el general Vides Casanova y por los coroneles Flores Lima y Blandón, y no por todo el Alto Mando, como en otras ocasiones, era una señal de que pudiera haber alguna crisis en la FA.

Por último, el coronel Palacios, Comandante de la 1a. Brigada de Infantería, en un discurso con ocasión de la entrega de títulos a campesinos beneficiarios, fustigó a los expropietarios por su oposición a las reformas, por su manipuleo del poder político a través de sus medios económicos, por responsabilizar a otros de sus fracasos y les exhortó a reflexionar sobre los errores cometidos y a unirse al pueblo y a la FA en la construcción de una sociedad mejor.

A un nivel inferior, también durante el mes, se agudizó la diferencia entre el PDC y ARENA, primero por declaraciones hechas por Duarte du-

rante su gira por Europa, en las que atacó duramente a D'Aubuisson por sus ideas y su trayectoria represiva así como por sus declaraciones públicas y promesas de eliminar a sus enemigos, a lo que el aludido contestó irónicamente tomándolas como producto de mentes enfermizas de pseudolíderes que quieren desinformar sobre lo que pasa en el país. Después la polémica se centró en acusaciones reiteradas por ARENA contra el PDC por causar el caos económico, mientras que éstos acusaron a los de ARENA de derechistas y de boicotear las reformas.

La crisis económica —o el caos, del que se inculpa en las discusiones políticas— se sigue manifestando de múltiples maneras. Los transportistas se quejan de que las pérdidas por actos de sabotaje se elevan a cifras astronómicas.

A pesar del estado de sitio y de otras medidas represivas, se siguen suscitando conflictos laborales y muchos empleados públicos están pendientes del pago de sueldos atrasados. Más centros de trabajo se cierran o están en peligro inminente de ello. El desempleo sigue aumentando, según declaraciones del ministro de trabajo. D'Aubuisson afirmó que la crisis económica se mantiene porque su partido no controla los centros neurálgicos de la economía, es decir los bancos Central de Reserva e Hipotecario, y los ministerios de hacienda y planificación. A todo ello se añaden toda una serie de abusos corruptivos que se van descubriendo: una auditoría del ISTA no pudo encontrar justificación a casi dos millones de colones desaparecidos; 30 alcaldes del país están siendo procesados por mal manejo de fondos en cantidades considerables.

Altos funcionarios gubernamentales hicieron declaraciones alarmantes. El vicepresidente del Banco Central de Reserva afirmó que la producción nacional se redujo a la cuarta parte, la fuga de divisas superó los mil millones de dólares, al ser nacionalizadas varias instituciones financieras estaban en crisis con más del 20% de sus préstamos considerados como irrecuperables. El INCAFE heredó una empresa descapitalizada (la Compañía Salvadoreña de Café), con un déficit de 166.6 millones de colones. El ISTA no dispone de dinero para seguir pagando propiedades (sólo ha pagado 113 y le faltan otras 184, de 401 intervenidas). Ha habido un nuevo recorte en la cuota de exportación del café, lo cual implica una disminución en la entrada de divisas en más de 20 millones de dólares, mientras que solamente en el rubro de importación de petróleo se necesitan 18 millones de dólares mensuales.

En esta situación, las incrementadas ayudas difícilmente podrán paliar la crisis. AID hizo una donación de 20 millones de dólares para ayuda a la balanza de pagos y a la reforma agraria. Pero en el mes se otorgaron a El Salvador préstamos multimillonarios para ayudar a salir de la crisis y reactivar la economía, así como profundizar su dependencia: el BID concedió 66 millones de dólares para continuar con la presa San Lorenzo, el BCIE 35.3 millones de dólares para Financiera Nacional de la Vivienda y el FMI, posiblemente por presión de Estados Unidos, como ha sido denunciado, concedió 81 millones de dólares más para estabilizar la economía, aunque imponiendo sus acostumbradas condiciones de austeridad. Según el *New York Times*, este crédito del FMI es de lo más político y controversial que haya concedido dicha institución y puede ser ocupado para compra de armas; sólo el 12% de la ayuda norteamericana va a programas de beneficio popular, mientras el resto se desvía hacia el ejército, las agencias financieras del gobierno y la empresa privada. Con todo esto, el servicio de la deuda externa se eleva a 38.4 millones de dólares, los pagos de amortizaciones a 24 millones de dólares y el incremento constante del endeudamiento a muy corto plazo en 1981 subió a 300 millones de dólares (según al CEPAL), lo cual supone más de 30% de las exportaciones de bienes y servicios.

Mientras tanto, la guerra continuó con todo su furor. Del lado gubernamental se prorrogó rutinariamente el estado de sitio, se realizaron continuos cateos y otra serie de acciones, en uno de los cuales fue atacado el local de SICAFE durante un acto cultural, resultando golpeados varios sindicalistas y secuestrado el secretario general de una subseccional de finanzas. El famoso llamado de la FA se concretó en pedir delatar e informar sobre los malos ciudadanos.

Dos grandes operativos fueron montados en el mes, el primero en Chalatenango, entre el 16 y 23 de julio, con 2-3 mil efectivos, cuyo objetivo era recuperar Carrizal y Ojos de Agua que por tres semanas estuvieron en manos del FMLN; el segundo en Usulután, del 26 de julio en adelante, con la participación de 3-5 mil efectivos, en la zona comprendida entre los puentes Cuscatlán y de Oro. Otros operativos menores fueron montados, uno urbano en Santa Tecla, otro en Cuscatlán por la zona de San Francisco, y otros en San Vicente en la zona norte de la carretera panamericana y por la de San Marcos Lempa. Como resultado de todas esas acciones, perdieron la vida 316 personas de la población civil (200 de ellas

campesinos) y fueron capturadas otras 67; mientras el FMLN tuvo 47 muertos en combate. También fue asesinado el arquitecto belga Bernardo Deverchen, quien colaboraba con la arquidiócesis de San Salvador.

Por su parte, el FMLN realizó 254 acciones en el mes (76 en el departamento de San Salvador, 51 en el de San Vicente, 38 en el de Santa Ana y 26 en el de Usulután), de las cuales 93 fueron de sabotaje, 12 tomas, 100 acciones estrictamente militares y 4 de ajusticiamiento. Las acciones militares más relevantes consistieron en un ataque simultáneo a Tecoluca, Santa Clara (con la toma de la ciudad y el aniquilamiento del puesto militar) y a San Vicente, así como numerosos ataques a los ferrocarriles de FENADESAL en San Vicente. Como consecuencia, se han hecho públicas 110 muertes de la FA: 1 subteniente, 2 subsargentos, 9 cabos, 95 soldados y 3 comandos.

En el ámbito internacional, además de la preparación del testimonio de Reagan ante el Congreso, se cambió de Secretario de Estado, Schultz, quien declaró que no presionaría al gobierno salvadoreño para una negociación con la guerrilla, mientras el Subsecretario Adjunto, Enders, declaró que se debería dar una oportunidad a la izquierda para participar en las nuevas instituciones democráticas en El Salvador.

Dentro del área centroamericana se agudizan los problemas y tensiones, tanto en lo militar como en el intercambio económico entre países, dificultado por las medidas cambiarias impuestas por la aguda crisis económica generalizada. La Comunidad Democrática Centroamericana tuvo una reunión del más alto nivel en San Salvador, donde se admitió a Guatemala, con la protesta de Nicaragua y Panamá que la consideran una confabulación derechista auspiciada por los Estados Unidos. Pero la oposición a ese proyecto se vio muy debilitada con un acontecimiento aparentemente inesperado: en la noche del 30 de julio renunció el presidente Aristides Royo, de Panamá, y aunque tomó el mando político el vicepresidente, todo parece indicar que fue un verdadero golpe de Estado, pues la figura más destacada fue el Jefe de la Guardia Nacional, coronel Paredes, quien pidió la renuncia a todo el gabinete para reestructurarlo. Después de este hecho, Nicaragua quedó aún más aislada frente a la ofensiva político-militar norteamericana la cual tiene de punta de lanza y de baluarte al ejército hondureño.

Como consecuencia de la intervención mili-

tar hondureña en El Salvador, el comando "Froilán Turcios" detonó bombas en las plantas eléctricas de Tegucigalpa, dejando sin energía a la capital y parte de la república durante varios días. El lema de la operación rezaba: "Fuera tropas de El Salvador". Sin embargo, el jefe de las FFAA hondureñas atribuyó el atentado al FMLN en un discurso altamente acusatorio, que fue retransmitido y editado en El Salvador. Todo esto desató una campaña de registro y rumores en Tegucigalpa. Al final del mes el ejército hondureño realizó unas gigantescas operaciones conjuntas con militares norteamericanos cerca de la frontera con Nicaragua, denominadas "Operación Despliegue Combinado".

Nicaragua sufre el acoso constante de grupos contrarrevolucionarios que parecen tener sus bases en Honduras, pero sus protestas ante ese gobierno no logran obtener soluciones de fondo o permanentes. La misma celebración del tercer aniversario del triunfo de la revolución sandinista se vio ensombrecida por enfrentamientos con exsomocistas. A pesar de todo, es el único país del área que el año pasado tuvo incrementos en el PIB (de un 8.7%), y sus mayores logros han sido en los campos sociales (educación, salud, etc.) y de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA se observan los derechos humanos, a diferencia de otros países de la región. Sin embargo, tuvo que ser renovado por 6 meses el estado de Emergencia Nacional y se racionalizó el uso de la gasolina (prácticamente un racionamiento).

Costa Rica sigue sumergida en la más profunda crisis económica, por lo que el gobierno tomó medida de fuertes incrementos en los precios de algunos productos o servicios, especialmente los relacionados con el petróleo. Los

aumentos y las medidas proteccionistas complican el intercambio comercial, sobre todo con Honduras, al tiempo que el gobierno dice no poder ayudar ya a los miles de refugiados que tiene en su territorio. Por otro lado, se multiplican los conflictos armados en la frontera, propiciados por exsomocistas, lo cual enfria las relaciones con Nicaragua, hasta el punto de expulsar a tres diplomáticos de este país, incrementar los temores y buscar un fortalecimiento de sus defensas armadas.

En Guatemala, el general Ríos Montt impuso el estado de sitio al finalizar el período de amnistía, cerró todos los espacios políticos, impuso la censura más estricta y emprendió una sistemática tarea de represión urbana y rural unida a las operaciones militares antiguerrilleras; la Asociación de Periodistas Demócratas de Guatemala denunció que el ejército ejecutó 29 masacres que costaron la vida a 4,000 personas en los primeros 63 días de gobierno de Ríos Montt.

La barbarie se ha asentado en ese país, con la bendición del gobierno norteamericano que ofrece generosamente su ayuda, y con la instrumentalización del pietismo presidencial como justificación de todo, como queriéndose convertir en un Ayatollah criollo y tropical, pero más sanguinario. La crisis económica que padece llevó a medidas restrictivas en el comercio con otros países, exigiendo pago en moneda guatemalteca, originando protestas y cierres de fronteras a las mercaderías.

En el mes de julio, como se ha visto, estuvo catalizado por la certificación de Reagan sobre El Salvador, así como por las tensiones crecientes en la región, todo ello tendiente a estrangular los movimientos revolucionarios de liberación.